

# La calidad de la democracia y la violencia en América Latina

## The Quality of Democracy and Violence in Latin America

DOI: <https://doi.org/10.18566/rfdcp.v55n142.a3>

Pedro H. Villas Bôas Castelo Branco 

Profesor Asociado del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (IESP-UERJ). Doctor en Ciencia Política (IUPERJ) y Magíster en Teoría del Estado y Derecho Constitucional (PUC-Rio). Coordinador del Laboratorio de Estudios de Defensa y Seguridad Pública (LEPDESP-UERJ); Investigador Científico del Estado de Río de Janeiro (CNE-FAPERJ); Becario de Productividad PQ2/CNPq.

Carina Barbosa Gouvêa 

Profesora permanente del Programa de Posgrado en Derecho, Maestría y Doctorado de la Universidad Federal de Pernambuco (PPGD/UFPE); Postdoctora en Derecho Constitucional por la Universidad Federal de Pernambuco (PPGD/UFPE); Doctora y Maestra en Derecho por la UNESA; Coordinadora del Grupo de Estudios e Investigación "Teoría de la Separación de Poderes y Crisis del Sistema Democrático Brasileño" vinculado al PPGD/UFPE; Vice líder del Grupo de Investigación Derecho Internacional y Derechos Humanos (UFPE), CNPq.

---

Cómo citar este artículo:

Castelo Branco, Pedro H. Villas Bôas, y Gouvêa, Carina Barbosa (2025). La calidad de la democracia y la violencia en América Latina. *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 55(142), 1-XX.

Recibido: 27 marzo de 2023

Aprobado: 30 de noviembre de 2024

## Resumen

Las democracias representativas latinoamericanas han sufrido ataques que vienen minando sus estructuras y provocando déficits democráticos. La región latinoamericana también se ve rodeada de movimientos iliberales y antidemocráticos que abrazan la polarización y la reivindicación de la participación de los militares en la política. Se observa en América Latina una combinación de inclinaciones antidemocráticas y militaristas que resulta de convertir los adversarios políticos en enemigos, de una persecución de opositores mediante el uso de mecanismos de violencia, vigilancia y represión. Los escándalos de corrupción envolviendo las élites políticas y empresariales, la incapacidad de renovación de los partidos políticos, las demandas populares por una relación directa con sus liderazgos, la frustración derivada de crisis políticas y la carencia de servicios públicos básicos han provocado numerosas movilizaciones y protestas en diferentes países como Chile, Perú, México, Brasil, Colombia, entre otros países. Los enfoques metodológicos que buscan medir la calidad de las democracias carecen de criterios que tengan en cuenta el populismo, la militarización, la securitización y el militarismo. Investigar la calidad de la democracia en América Latina exige la comprensión de las formas de violencia que se manifiesta a través del militarismo y un proceso securitización y militarización, los que se reflejan, por ejemplo, en la apuesta de las Fuerzas Armadas como fuerza salvadora o guardia pretoriana de autócratas elegidos.

### Palabras clave

Calidad de la democracia, Militarización, Securitización, Militarismo.

## Abstract

Latin American representative democracies have faced challenges that undermine their structures, leading to democratic deficits. The region is surrounded by illiberal and anti-democratic movements characterized by polarization and calls for military involvement in politics. In Latin America, anti-democratic and militaristic tendencies emerge from framing political opponents as enemies, and through mechanisms of violence, surveillance, and repression. Corruption scandals involving political and business elites, the inability of political parties to renew themselves, demands for direct leadership, frustration with political crises, and lack of basic public services have sparked protests in countries like Chile, Peru, Mexico, Brazil, and Colombia. Methodologies to assess democratic quality often overlook criteria such as populism, militarization, securitization, and militarism. Studying democracy in Latin America requires understanding violence manifested through militarism, securitization, and military involvement, as reflected in perceptions of armed forces as saviors or praetorian guard of elected autocrats.

### Keywords

Democracy Quality, Militarization, Securitization, Militarism.

## Introducción

El aumento de la polarización, en particular del populismo<sup>1</sup> de extrema derecha, normalizó los ataques a la democracia y, por consiguiente, buena parte de la población sufre los efectos de los discursos de odio dirigidos contra las diferencias ideológicas, las élites políticas, los partidos y las Cortes. En este sentido, finalmente las instituciones democráticas se convirtieron en blancos recurrentes de agrupaciones de extrema derecha, inflados por líderes populistas con discursos militaristas. Movimientos populistas en todo el mundo han estado probando los límites de las democracias representativas. El sentimiento de orfandad ante las promesas no cumplidas por los Gobiernos electos, la frustración con el sistema de representación política y el desprecio por los partidos se han convertido en un caldo de cultivo para movimientos extremistas antidemocráticos, que se identifican con líderes populistas contrarios a las élites e instituciones de la democracia liberal. Aunque existen populismos de izquierda y derecha, se percibe un notable crecimiento de la ultraderecha en Brasil y otros países de la región, donde la espiral de la polarización es inequívoca. En América Latina la ultraderecha se ha identificado con grupos extremistas norteamericanos que adoptan la violencia política como acción y método, que resulta en la amenaza a autoridades públicas, agresión a los opositores, ataques contra las instituciones democráticas, etc.

## Metodología

El desarrollo de la investigación adopta prioritariamente el método comparativo para contrastar distintos estudios que abordan la semántica de la securitización, militarización y militarismo y sus variables, las cuales pueden emplearse como indicadores de transformaciones políticas y sociales. Este método también toma en consideración la resignificación de los términos, los factores que provocan cambios

---

1 Para extraer de la gama semántica la inflexión de sus significados, consideramos que los populismos tienen un carácter conceptual-instrumental y pueden definirse como un iliberalismo democrático con propiedades variables. Representan un cierto tipo de ideología, discurso, estrategia, movilización y acción política en el contexto cultural y político específico. Es decantada, a través de movimientos formales o informales, directa o indirectamente en el sistema democrático por un líder carismático que representa y lidera una fuerza antisistema, basando sus creencias en instituciones morales y éticas, con el propósito de consolidar y legitimar un régimen político populista bajo el manto de la soberanía popular y la democracia. Para subvertir la democracia, es necesario volverse democrático. Ver: Gouvêa y Castelo Branco (2020).

políticos que alteran las estructuras jurídicas y sociales, así como los neologismos, que tienen el poder de transformar el espacio de la experiencia política y social, y son decisivos en la producción de nuevos horizontes de expectativas.

Se utilizará una investigación bibliográfica y documental para la discusión y el análisis de la legislación. En cuanto al método, la investigación se clasifica como histórica y comparativa. Cabe destacar que la investigación tiene un enfoque cualitativo, debido al análisis subjetivo de los datos realizado a lo largo del trabajo, para llegar posteriormente a las respectivas conclusiones.

La investigación se dividió en cuatro temas. En el primero se contextualiza la calidad de la democracia en América Latina. En el segundo se aborda conceptualmente la distinción entre securitización, militarización y militarismo. El capítulo tres describe y analiza la relación entre populismo y militarismo, y la consecuente naturalización de la presencia militar en la región. El capítulo cuatro presenta el concepto de militarización de la política y su evolución, y analiza el concepto de militarización de la seguridad pública.

## La democracia en América Latina

La convocatoria de las fuerzas castrenses para participar en Gobiernos y la ampliación de sus funciones han demostrado ser un grave riesgo para los regímenes democráticos, ya que el control civil sobre los militares puede invertirse, convirtiendo a los liderazgos civiles democráticamente electos en rehenes de las Fuerzas Armadas, como se percibe en Bolivia. La ampliación de la misión de los militares en Bolivia llevó a su participación en políticas sociales, a la reducción de su poder y a un alto nivel de autonomía, debilitando la supervisión civil sobre sus actividades (Dasso, 2020).

Los movimientos populistas tienden a dominar espacios públicos, utilizar el clientelismo y la corrupción, y suprimir cualquier mecanismo que pueda impedir el desarrollo de una sociedad civil crítica. Además, se caracterizan por discursos de odio, xenofobia y aporofobia. La postura antiestablishment se amplió en todas partes, debido a la pérdida de beneficios sociales, incumplimiento de promesas, etc. Estas movilizaciones se han manifestado de muchas maneras, percibidas

tanto a través de movimientos sociales organizados, como en los movimientos de los partidos políticos, o a través de un cierto tipo de liderazgo que tiene el mismo enfoque común: representar la “voz del pueblo”.

Se observa como respuesta a estos movimientos el aumento de la violencia política de grupos extremistas de derecha. Bajo el argumento de la lucha por la libertad amenazan con invadir parlamentos o los invaden, atacan adversarios como si fueran enemigos, lo que representa una cultura militarista que cultiva enemigos internos. Estos grupos encuentran políticas favorables que flexibilizan la posesión y porte de armas,<sup>2</sup> así como el mayor acceso a armas y municiones. Hoy en día, la llegada de los militares a la escena política no ocurre a través de golpes de Estado, tanques en las calles o rupturas institucionales violentas, sino a través del reclutamiento de gobernantes y la apelación a segmentos de la sociedad que confían en que las fuerzas militares puedan garantizar estabilidad política y previsibilidad en la vida social. La región se encuentra ante una militarización en diversas áreas, por lo cual el estado de excepción puede naturalizarse en cualquier momento (Castelo Branco y Gouvêa, 2022).

La inversión gradual del control democrático constituido por la relación civil-militar, por medio de la subordinación de la autoridad civil a la oficialidad militar, tiende a agudizar un aspecto del militarismo: el belicismo. De esta forma, la presencia marcada de miembros de las Fuerzas Armadas en el Gobierno se hace sentir aún en otros espacios de la gestión, como los cargos de jefatura y asesoría ligados al Poder Ejecutivo, que abarcan también algunas actividades junto al Poder Legislativo.

A pesar de la amplitud semántica del militarismo, cuando los militares asumen el protagonismo político en democracias, se verifica la primacía del sentido bélico de la ideología militarista. Con la inversión la política queda subordinada a la lógica de la guerra, transformando cualquier forma de oposición en facción, a los adversarios en criminales y a los partidos de oposición (al Gobierno) en enemigos.

La militarización de la política acabó por fortalecerse y crecer, porque en diversos países de la región miembros del oficialismo asumieron posiciones de autoridad en estructuras de poder no militares. En diversos países de América

---

2 En Brasil, Bolsonaro, desde que llegó al poder en 2019, ha emitido más de 40 decretos para que los civiles puedan acceder a las armas, un mercado que ha registrado que los brasileños haya comprado diariamente una media de 1.300 armas (Rede Brasil Atual, 2022).

Latina, la militarización de la política fue abordada como una preocupación central en los abordajes de la seguridad. Factores como la fragilidad institucional de los Estados, el pasado de regímenes de excepción, la inestabilidad de las democracias, la seguridad y el uso de las fuerzas castrenses y policiales para cuestiones relativas a la seguridad pública han llevado a las élites políticas a recurrir a soluciones represivas para garantizar la legitimidad de las autoridades civiles frente a la violencia.

En México,<sup>3</sup> la Guardia Nacional fue formada en 2019 por efectivos de la entonces Policía Federal (extinta en diciembre de 2019) y unidades policiales militares del Ejército y la Armada. Hasta septiembre de 2022, la Guardia estaba subordinada a la Secretaría de Seguridad y Protección Civil y era dirigida por civiles, mientras que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) tenía el control operacional del día a día, y proporcionaba los comandantes y el entrenamiento. En septiembre de 2022, el control total de la Guardia fue entregado a la SEDENA (Ejército mexicano). La Guardia hoy en día, junto con las policías estatales y municipales, es responsable de hacer cumplir la ley y mantener el orden. Los militares regulares también apoyan activamente las operaciones policiales.

A partir de 2022, las Fuerzas Armadas colombianas<sup>4</sup> se dedican principalmente a la seguridad interna, particularmente en el combate al narcotráfico, al terrorismo y a las operaciones de contrainsurgencia contra narcotraficantes, militantes de diversas facciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de organizaciones terroristas/guerrilleras y otros grupos armados ilegales. El Gobierno colombiano firmó un Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, pero algunos exmiembros, conocidos como disidentes, decidieron volver a luchar. Estos grupos disidentes incluyen los grupos terroristas designados como FARC y Segunda Marquetalia. Los militares colombianos reanudaron las operaciones contra los disidentes de las FARC y sus grupos paramilitares sucesores a finales de 2019. En 2017, el Gobierno colombiano inició negociaciones formales de paz con el ELN, pero en enero de 2019 las suspendió poco después de que el grupo insurgente hiciera detonar un automóvil-bomba en la Academia Nacional de Policía de Bogotá. Luego reanudó las operaciones de contraterrorismo/

---

3 Las encuestas fueron cartografiadas por The World Factbook. Ver: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/>. The World Factbook proporciona información básica sobre la historia, la población, el Gobierno, la economía, la energía, la geografía, el medio ambiente, las comunicaciones, el transporte, el Ejército, el terrorismo y las cuestiones transnacionales de 266 entidades mundiales.

4 Las encuestas fueron cartografiadas por The World Factbook.

contrainsurgencia contra el grupo. Los militares también se concentraron en los desafíos de seguridad relacionados con Venezuela, que se integraron en las operaciones de narcotraficantes y disidentes del ELN y las FARC.

Entre 2013 y 2017, Venezuela<sup>5</sup> estableció al menos una docena de empresas lideradas por militares en varios sectores económicos, como agricultura, bancos, construcción, seguros, medios de comunicación, minería, petróleo y turismo. En 2020, oficiales militares supuestamente comandaban al menos 60 empresas estatales. En 2019, nueve de los 32 ministerios del Gobierno estaban controlados por los militares, incluyendo los ministerios de Agricultura y Energía.

A mediados de 2022, entre 1.500 y 2.000 miembros de las organizaciones terroristas disidentes del ELN y de las FARC y Segunda Marquetalia operaban en Venezuela, principalmente en los estados de Amazonas, Apure, Bolívar, Guárico, Táchira y Zulia. El ELN hacía presencia en 12 de los 23 Estados de Venezuela. Estos grupos fueron considerados particularmente activos en el Estado de Apure, donde los militares venezolanos se enfrentaron varias veces con disidentes del 10° Frente las FARC entre 2020 y 2021.

La Guardia Nacional venezolana es responsable de mantener el orden público, vigilar las principales instalaciones gubernamentales y las prisiones, realizar operaciones antidrogas, vigilar las fronteras y hacer cumplir la ley en zonas remotas. Le rinde cuentas al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) o unidad paramilitar de la Policía fue creada por el presidente Maduro para reforzar la seguridad interna tras las protestas antigubernamentales de 2017. Ha sido acusada de múltiples violaciones de los derechos humanos.

Además de la militarización de la seguridad pública y de la militarización de la salud pública en países como Brasil, vemos también el alto oficialato castrense avocarse a la condición de árbitro del proceso electoral en flagrante atentado contra la democracia.

En Brasil, las elecciones de 2022 estuvieron marcadas por la fuerte presencia militar del Gobierno populista autoritario de Bolsonaro. El papel de los militares en las elecciones está claramente definido por el marco constitucional y en

---

5 Las encuestas fueron cartografiadas por The World Factbook.

la legislación electoral, limitándose a brindar soporte logístico de seguridad y facilitar la distribución de las urnas en todo el país (Vasconcelos da Silva, 2022). De esta forma, para Vasconcelos da Silva, la desmilitarización de las elecciones es una característica para la calidad de la democracia brasileña.

Con la victoria de Lula, los generales apostaron por el ataque camuflado para preservar sus principales posiciones de poder en la transición. Desde la histórica derrota de la placa militar, de amplia preferencia en el cuartel, el Generalato buscó demostrar insubordinación a la integral autoridad del presidente electo, aunque sabiendo que era inviable un golpe de Estado que apelara al art. 142 de la Constitución de Brasil. Mientras Heleno actuaba entre bastidores y Braga Netto en el Cuartel General golpista en Brasilia, Mourão y Villas Bôas repaginaban en la opinión pública discursos “contrarrevolucionarios”.

El Ministerio de Defensa hizo 88 preguntas al Tribunal Superior Electoral (TSE) y cuestionó sin pruebas la suavidad del proceso democrático electoral brasileño. Los militares participaron de la comisión como portavoces del Gobierno federal y, consecuentemente, de la narrativa de la posible existencia de problemas con la urna electrónica, a través de la emisión de varios informes que consideraron, entre otras cuestiones, que los procedimientos proporcionados por el TSE eran insuficientes para un análisis técnico más detallado. Transitando entre el silencio, la dubiedad y hasta la “indirectas casi directas”, el Ejército, en particular, alimentó el discurso de desconfianza hacia las urnas electrónicas. Además, retiró a manifestantes de las carreteras y protegió a grupos organizados que clamaban por un golpe de Estado frente a los cuarteles, a pesar de los costos disciplinarios con la agitación interna y la exposición de su indulgencia ante las manifestaciones golpistas de oficiales en servicio activo a través de redes sociales. Estas acciones fueron el detonante para que los movimientos populistas bolsonaristas creyeran en un supuesto fraude electoral, desencadenando una ola de protestas violentas y antidemocráticas contra la elección del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, acompañadas de pedidos de intervención militar.

Las constantes amenazas enfrentadas por las democracias más o menos frágiles de la región han exigido reacción tanto institucional, como de la sociedad civil. La calidad de las democracias, en virtud de sus diferencias, es evaluada por

criterios mínimos concernientes a elecciones limpias y competitivas, sistema pluripartidista, independencia de poderes y derechos. Estos indicadores son percibidos, por ejemplo, por Freedom House.<sup>6</sup>

Para comprender las democracias y sus procesos de democratización, es necesario abordar la cuestión de la violencia y la desigualdad social. Con este fin movilizamos los conceptos de securitización, militarización y militarismo, sin los cuales es imposible medir la calidad de las democracias en América Latina.

El diagnóstico de militarización de la región carece, sin embargo, de algunas distinciones conceptuales, ya que a menudo se confunden los términos militarización, militarismo y remilitarización. Distinguirlos es imprescindible para trazar un panorama en el que se puedan comprender las relaciones civiles-militares en la región, que pasan procesos complejos comprendidos a la luz de la securitización y la militarización.

## Enfoque conceptual: distinción entre securitización, militarización y militarismo

El diagnóstico de la calidad democrática en América Latina demanda la comprensión de los conceptos de militarismo, militarización y securitización. Estos son imprescindibles para descubrir formas de violencia típicas en la región que dificultan la profundización de los procesos de democratización. Iniciamos por el concepto de securitización, por ser más amplio en virtud de no necesariamente contemplar aspectos militares, sino solo eventualmente asumir características del militarismo y la militarización.

La securitización consiste en una representación discursiva cuyo tenor señala una amenaza que, debido a su urgencia, no puede ser tratada por las vías políticas normales, ya que requiere medidas de emergencia. Una securitización puede ser *ad hoc* o institucionalizada. La verificación de una situación de (in)

---

6 Freedom House es una organización no gubernamental que trabaja para defender los derechos humanos y promover el cambio democrático, centrándose en los derechos políticos y las libertades civiles. Actúa como catalizador de la libertad mediante una combinación de análisis, defensa y acción. Para más información, ver: <https://freedomhouse.org>.

seguridad deriva de una construcción social cuya trayectoria inicial se da por medio de la elocución de un acto de habla, que revela la primacía de elementos subjetivos sobre objetivos.

Securitización se entiende como una perspectiva que concibe la seguridad a través de lo que se percibe como amenaza. Quien invoca la securitización necesita poder y capacidad para convencer de la urgencia de enfrentar la amenaza identificada. En Estados Unidos y América Latina la percepción del narcotráfico como amenaza se institucionaliza, justificando la movilización de una compleja maquinaria de medidas que a veces se traducen como guerra contra las drogas. La titulización puede ser entendida como la institucionalización de lo excepcional, que resulta de una decisión política que, al elegir la urgencia o situación de amenaza, justifica una serie de respuestas y medidas de emergencia cuya adopción pueda ser normalizada. Contiene un rasgo heurístico, en el sentido de desvelar lo subyacente a la seguridad. Se trata de una herramienta analítica que permite evaluar los efectos políticos de identificar a un actor o tema como una amenaza. Evocar la seguridad desde un punto de vista discursivo resalta la cuestión securitizada y, debido a su urgencia, legitima la suspensión de leyes del ordenamiento jurídico, a fin de adoptar medidas de emergencia y enfrentar la amenaza (Tickner, 2015).

La securitización tiende a excluir la amenaza del debate público, debido a la situación de urgencia que se le atribuye, de modo que se tiende a normalizar la restricción de derechos, así como la ampliación de poder que justifica para su combate (Tickner, 2015). Los procesos de titulización guardan similitudes con la militarización, pero no se confunden con esta. La seguridad no significa adoptar el modo militarizado de administración de amenazas. Mientras que los procesos de titulización reúnen un amplio y a veces sutil repertorio de respuestas, la solución militar para la resolución de problemas jamás se desvincula de una concepción bélica, lo que tiende a la marcialidad y a la violencia.

Es importante comprender también cuál es la relación entre securitización, militarismo y militarización, ya que la percepción de amenazas puede conducir a procesos de militarización, precisamente aquellos referidos al uso de técnicas y métodos militares que siempre incluyen en alguna medida elementos del militarismo. No todos los procesos de seguridad conducen a la militarización; la identificación de amenazas puede movilizar los más variados modos de lidiar con lo que se percibe como una urgencia, que incluyen el uso de policías, Fuerzas

Armadas u otros métodos. Sin embargo, el hecho es que la securitización es el modo de enfrentar las amenazas sin abordar las causas subyacentes, que a menudo derivan de problemas estructurales.

El uso de las Fuerzas Armadas constituye el último recurso de la soberanía estatal, destinado a la defensa de la patria y al combate contra enemigos externos. Sin embargo, la baja intensidad de los conflictos interestatales en la región hace que el uso recurrente de las Fuerzas Armadas sea doméstico, lo que acarrea serios problemas vinculados a la fabricación de enemigos internos. La expansión de las funciones de las Fuerzas Armadas es una tendencia global, impulsada por nuevos desafíos como las demandas ambientales y la profesionalización de las fuerzas castrenses. No obstante, se desvían cada vez más de sus funciones defensivas, actuando en mayor o menor medida conforme a una ideología militarista. Esta ideología se basa en la creencia de la superioridad militar sobre los civiles y en valores verticales como la jerarquía, la disciplina y el sentido de la misión, que chocan con formas horizontales de contestación, negociación, diálogo y persuasión que son inherentes a las prácticas democráticas.

En el amplio repertorio de respuestas a las variadas amenazas, socialmente construidas por la vía discursiva, podemos encontrar la solución militarizada, de modo que no toda percepción de amenaza conduce a la militarización, es decir, una medida coercitiva orientada de acuerdo con determinados métodos, dispositivos, técnicas, rutinas, disciplinas, jerarquías, etc. En el modo militarizado de administración de los conflictos el empleo de la violencia es inminente, porque se anticipan los escenarios de graves amenazas y enemigos reales.

El militarismo es una ideología que se refiere a la creencia en la superioridad de los valores militares y en la primacía de la eficiencia castrense en la administración de toda suerte de conflicto. El militarismo difiere del modo militar de actuar, está contenido en un modo de pensar decantado en la sociedad que prioriza los valores y acciones militares en detrimento de los civiles, lo que significa una mirada de costumbres, intereses, prestigio, acciones y pensamientos, asociados a los militares y a las guerras, que trasciende incluso los auténticos propósitos militares. Una sociedad aficionada a lo militar puede florecer de forma más intensa en tiempos de paz. Tanto los soldados como la sociedad adoptan los valores y modos de pensar militares por convicción propia, no con fines defensivos. Esta visión está vinculada al aspecto cultural y comúnmente no está asociada a un Gobierno específico. Al contextualizar

la naturaleza del militarismo, Vagts (1959) argumenta que el término no es lo opuesto al pacifismo, sino al civilismo. El militarismo implica un conjunto de sistemas de pensamiento y valores que transfieren la mentalidad militar a las formas de actuar y tomar decisiones dentro de las esferas civiles.

El militarismo no se opone a la paz, de hecho prospera en tiempos de paz, en los que el cuartel puede convertirse en un ambiente favorable para el florecimiento de relaciones de casta y culto. Se tiende a glorificar la beligerancia y valores que se alejan de los propósitos de la defensa y de la racionalidad militar, lo que fomenta la exaltación de la guerra, la lealtad corporativa y la creación de enemigos internos, perjudicando así los objetivos propiamente militares.

La distinción entre militarismo y militarización es fundamental, pues existe una confusión semántica entre ambos conceptos, lo que perjudica los diagnósticos y las investigaciones que buscan comprender las relaciones de los respectivos términos con la seguridad en la región.

El primer término corresponde a una ideología, una fe en la superioridad de los valores y técnicas militares. Precisamente, se apoya en la creencia en la primacía del método marcial en la resolución de los conflictos. La militarización, por su parte, es un proceso por medio del cual se pone en práctica el militarismo. La militarización de la política, la seguridad pública o la sociedad implica la ocupación de funciones típicamente civiles en democracias, así como el acceso a cargos que permiten influir en la toma de decisiones políticas.

Durante mucho tiempo se depositó la confianza en la teoría de Samuel Huntington (1984), cuya suposición partía de la idea de que cuanto más profesionalizados fueran los integrantes de las Fuerzas Armadas, menor sería el riesgo de politización de la corporación, lo que ha sido varias veces falseado por la propia realidad. La profesionalización busca mantener a los militares subordinados al control civil-democrático, pero en la práctica también puede facilitar su ascenso a cargos políticos cuando los gobernantes los designan para cargos civiles, en razón de suponer su capacidad técnica y a veces como estrategia para afianzar su propio poder. La militarización de la sociedad se puede observar mediante la implementación de escuelas cívico-militares.<sup>7</sup>

---

7 La militarización de las escuelas en Brasil fue una política concretizada por Jair Bolsonaro, que se basó en el Decreto no. 665 del 2 de enero de 2019 y en el documento lanzado el 11 de julio de 2019, llamado "Compromiso Nacional por la Educación Básica", los cuales proponen: "La creación de escuelas militares

## Populismo y militarismo: la naturalización de la presencia militar en la región

Latinoamérica se convirtió en escenario de movimientos populistas que impulsaron la polarización y la reivindicación de la participación de los militares en la política. La frustración de los anhelos populares ante promesas incumplidas se extiende a Europa, Estados Unidos, África y Asia. En América Latina se observa una combinación de inclinaciones populistas y militaristas que transforma a los adversarios políticos en enemigos y lleva a la persecución de opositores, mediante el uso de mecanismos de violencia, vigilancia y represión. Por un lado, hay líderes populistas como Bolsonaro y Maduro, que niegan las instituciones democráticas, rechazan el sistema electoral, desprecian los partidos políticos, atacan al poder judicial y buscan apoyarse en los militares como base de sustentación de su Gobierno. Por otro, se percibe la presencia del militarismo civil en diversos segmentos de la sociedad en países como Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador. Estos sectores, que comparten la desconfianza hacia las élites políticas, a menudo vistas como corruptas, claman por la participación de los militares en el poder, ven en las fuerzas castrenses el último bastión salvador, capaz de garantizar estabilidad, previsibilidad y de recuperar valores como la autoridad, moralidad, jerarquía, disciplina y eficiencia.

Actualmente, en América Latina se observa una creciente fusión entre lo político y lo militar, orientada a difundir valores militares como la eficiencia, jerarquía, orden y disciplina. Hay un compromiso de parte de gobernantes como Bolsonaro de instalar en la sociedad un ethos militar. Esto, sin embargo, viene cambiando en algunos países. En Colombia, el presidente Gustavo Petro

---

'tradicionales' en todos los estados, administradas por la esfera federal (marina, ejército y aeronáutica); y la ampliación de la gestión compartida entre la sociedad civil y los militares, a partir de escuelas cívico-militares, bajo el comando de los estados y municipios'(Ricardo, 2020; Pinheiro et al., 2019). La expresión "cívico-militar", acuñada y difundida por el Gobierno federal, es cuestionable. Desde el punto de vista discursivo, la aproximación entre los términos cívico y militar asiente a una aproximación armónica o, tal vez, a un equilibrio entre esas dos dimensiones en el contexto escolar. Sin embargo, como veremos a lo largo de este artículo, la transposición de las escuelas al modelo "cívico-militar" conlleva, entre otros factores, impactos directos sobre la autonomía del profesorado y el recorte de libertades fundamentales de los alumnos. La investigación concluye con algunos indicadores: la militarización de las escuelas públicas se ha caracterizado por: (i) mayores recursos a los colegios militares federales; (ii) estrategias de recaudación voluntaria en las escuelas militarizadas; (iii) reserva de plazas para dependientes de militares, y (iv) mayor acceso a alumnos de perfil socioeconómico alto. Con base en tales singularidades, se puede deducir que las decisiones políticas sobre el presupuesto y los cambios en el proceso de selección pueden aumentar la llamada calidad de las escuelas restantes, sin que sea necesaria la transformación de las escuelas públicas en colegios militarizados (Ricardo, 2020; Pinheiro et al., 2019).

está promoviendo un cambio inédito en la cumbre militar. Se dispuso el pase a la reserva de 22 de generales de la Policía Nacional, 16 del Ejército, siete de la Armada y tres de la Fuerza Aérea (Redação Oeste, 2022). Según el jefe del Ejecutivo, el criterio utilizado para cambiar la cúpula militar del país fue “violación cero a los derechos humanos y corrupción”. El nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, el general Helder Giraldo Bonilla, se formó en derechos humanos y actuó en la implementación de programas en esa área. Sin embargo, la declaración de Petro elevó la tensión entre el Gobierno de extrema izquierda y las Fuerzas Armadas.

Entendemos la militarización como un creciente involucramiento de los militares en las agendas social, política, económica, ambiental y de salud. Es un juego intersubjetivo a través del cual hay una negociación entre presidentes y líderes militares para monopolizar espacios institucionales públicos, así como las actividades privadas de la autoridad militar, a cambio de subordinación a la autoridad presidencial y a la defensa del Gobierno. Los militares añaden beneficios y ventajas y, sobre todo, un vínculo directo con el Gobierno y la sociedad.

Se trata de seguridad porque cualquier problema en las agendas social, económica, política o cualquier otra agenda gubernamental se redefine como una amenaza. Se crea una narrativa que describe la situación como de extrema gravedad y los Gobiernos recurren a recursos especiales, suspenden reglamentos legales y reubican instituciones para lidiar con el riesgo. Con la seguridad, el Gobierno concentra el poder y las autoridades responden al problema desde una perspectiva militar, aumentando o reforzando las Fuerzas Armadas. Las concesiones que los Gobiernos hacen a los militares debilitan la institucionalidad democrática.

## Militarización de la política y militarización de la seguridad pública

En América Latina está surgiendo una nueva especie de militarización de la política, en la que autócratas elegidos convocan a los militares para que participen en Gobiernos populistas que carecen de suficiente apoyo político-partidista. No se trata exactamente de un retorno o de una remilitarización, ya que el contexto en la región ha cambiado y difícilmente contempla dictaduras, tampoco golpes militares que resultan en rupturas institucionales.

En diferentes países de la región, como por ejemplo Brasil, Bolivia, Venezuela y México, los militares alcanzaron posiciones políticas en el ámbito de la burocracia civil, ejerciendo un notable poder decisorio en estructuras estatales no militares. Atraídos por gobernantes legitimados por el voto popular, los militares alcanzaron un notable protagonismo político. Oficiales en reserva y en activo actúan como tomadores de decisiones en cargos de alto rango dentro de Gobiernos y otros órganos estatales. El control civil sobre los militares, arduamente conquistado durante la redemocratización de los países latinoamericanos, viene decayendo. Esto se refleja en el comportamiento de altos oficiales, que actúan como si tuvieran el monopolio y la última palabra sobre cuestiones políticas fundamentales que afectan a toda la población. Los oficiales actúan como si tuvieran poder de decisión sobre cuestiones civiles como procesos electorales, protestas, medidas sanitarias y cuestiones de seguridad pública. Una vez que los militares asumen el poder con la autorización de civiles que les ofrecen beneficios, se militarizan los temas, se crean enemigos internos y las autoridades civiles pierden control frente al proceso de autonomización militar.

Aunque el concepto de militarismo se ha extendido con la militarización de la pandemia,<sup>8</sup> es notable que las operaciones sanitarias llevadas a cabo por militares se perciben a través de su eficiencia y capacidad logística para el transporte y distribución de insumos fundamentales en regiones remotas, cuestión que ocurre de hecho. Los problemas surgen cuando un determinado Gobierno instrumentaliza las Fuerzas Armadas y las utiliza políticamente, cómo sucedió en Brasil en la pandemia por Covid-19.

---

8 Passos y Acácio establecieron una tipología que demarca la militarización de la pandemia en varios países de América Latina, como Chile, Bolivia, Ecuador, Honduras, Guatemala y El Salvador. La militarización comprende seguridad fronteriza, una misión cercana a la función clásica de los militares de defensa externa; logística, que comprende la distribución de víveres e insumos médicos, así como la repatriación de ciudadanos; atención médica, que incluye desde el apoyo en selección de pacientes, hasta casos de alta complejidad; industria de defensa, sobre todo dedicada a la producción de mascarillas, gel hidroalcohólico y distribución de medicamentos, una misión que, aunque no está relacionada directamente con la defensa externa, no implica graves consecuencias sobre el control civil de los militares; gestión política de la crisis, que incluye el nombramiento de militares para cargos políticos en ministerios o para liderar comités nacionales de emergencia que coordinan la respuesta a la pandemia; tareas de vigilancia, las cuales abarcan el patrullaje de calles, el manejo de centros de contención y la participación en barreras sanitarias en el territorio nacional, para asegurar el cumplimiento de las medidas de aislamiento social. Los militares han actuado en misiones que suelen ser problemáticas para la democracia y vulneran los derechos humanos de las clases populares: la participación en la gestión de la crisis sanitaria y el mantenimiento del orden público. La primera tarea es de corte político y debilita el control democrático sobre las fuerzas armadas, pues promueve su politización (Passos y Acácio, 2021).

La militarización ha pasado a ocupar un lugar central en los estudios sobre la seguridad en diversos países de América Latina. Esto ocurre debido a las deficiencias institucionales, el pasado de golpes y dictaduras, el apoyo a las democracias, el uso de las Fuerzas Armadas y tácticas militaristas de las fuerzas policiales en el tratamiento de asuntos vinculados a la seguridad pública y el llamamiento por parte de las élites para el empleo de las fuerzas castrenses, lo que debilita la legitimidad de las autoridades civiles en el tratamiento de problemas de delincuencia y violencia (Diamint, 2015; Verdes-Montenegro Escáñez, 2019).

El empleo de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad resulta en el debilitamiento del control civil democrático sobre estas y en la autonomización de la solución militar en el enfrentamiento de la violencia (Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], 2015). Además, el uso del dispositivo militar resulta ineficaz desde el punto de vista de la reducción de la criminalidad, e irracional desde la perspectiva del gasto público y la organización de la administración estatal. En América Latina, el uso de las Fuerzas Armadas en la represión del crimen ha dejado un saldo negativo caracterizado por corrupción, excesos, represión, asesinatos y la restricción de libertades (Diccionario de Seguridad Pública, 2018, p.948). En la región hay una confusión entre defensa y seguridad pública, entre las Fuerzas Armadas y las policías, además de la existencia de milicias y grupos paramilitares.

El uso recurrente de las fuerzas castrenses en actividades de seguridad pública tiende a incrementar la violación de derechos humanos, a destinar recursos para operaciones de mantenimiento de la ley y el orden que deben ser episódicas, y a desviar fondos que podrían ser utilizados para la formación de los policías. En algunos casos, también contribuye a restaurar la capacidad operacional de dichos policías. Después de todo, lo que justifica el uso, que siempre debe ser temporal, de las Fuerzas Armadas en actividades propias de la Policía es el agotamiento de los instrumentos policiales. Se percibe una inversión de la norma constitucional: las Fuerzas Armadas actúan como una fuerza auxiliar y reserva de la Policía. Así, es común que las fuerzas castrenses asuman tareas de seguridad pública, dejando de lado su rol de defensa nacional para actuar como fuerzas policiales, cuya lógica de operación difiere completamente en términos operativos, organizacionales, así como en la cadena de mando y entrenamiento. El empleo continuo de la última ratio estatal demuestra la fragilidad de un Estado que se convierte en rehén de los grupos que disputan el monopolio de la violencia y buscan privatizar el servicio de seguridad.

Hay numerosas razones que demuestran la ineficiencia e ineficacia del empleo de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Su empleo en la lucha contra la delincuencia no coincide con la reducción del número de delitos. En Brasil hubo reducción del número de homicidios, lo cual, a pesar de ser objeto de propaganda del Gobierno Bolsonaro durante las elecciones de 2022, se debe a factores como la pandemia y la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF, 2020), que limitó las operaciones de las policías militares en las comunidades del Estado de Río de Janeiro durante la pandemia por Covid-19.

La utilización de las Fuerzas Armadas refleja una política pública irracional y errática, que termina creando confusión entre el rol de las Fuerzas Armadas y el de la Policía. Esta estrategia, además de ser ineficaz, conlleva altos costos económicos, políticos y sociales. El uso de militares federales en acciones de seguridad pública tiende a estar marcado por la violación de derechos humanos, debido a la naturaleza del entrenamiento, pues se trata de una fuerza combativa, no comedida, como deberían ser las fuerzas policiales. En la práctica, hay un mimetismo cada vez mayor en el que las fuerzas policiales especiales se asemejan a las Fuerzas Armadas, lo que resulta en una lógica de conducta belicista (Kraska, 2007).

Por un lado, está la militarización de la Policía, que actúa dirigida por una política marcial, guiada por la lógica de la guerra y el enemigo interno. Por otro lado, en América Latina, la influencia de lo militar en la Policía sigue creciendo, impulsada por una concepción securitizada que reduce los problemas de seguridad pública ante las amenazas que deben ser enfrentadas tanto por la Policía, como por las Fuerzas Armadas. Esta tendencia genera una creciente confusión entre ambas instituciones, reflejada en la similitud de los uniformes, el tipo de armamento y los procedimientos marciales empleados.

La región sufre una violencia excesiva cuyos índices elevados no cesan, debido a la ineficacia de las políticas públicas de lucha contra el crimen. La securitización y militarización de la seguridad pública, junto con sistemas jurídicos ineficientes, discursos aporofóbicos, sistemas políticos polarizados y un punitivismo populista que arraiga cada vez más la presencia militar en estas funciones, no han logrado romper con el ciclo vicioso de la securitización. Este ciclo produce y reproduce la violencia en consonancia con la lógica del enemigo interno.

La militarización de la seguridad pública es uno de los factores que dificulta el control civil de las Fuerzas Armadas, lo que conduce al problema de la autonomía militar cuyo patrón ha cambiado en la región. Si en el pasado los militares intervinieron directamente en política y asumieron su conducción, actualmente actúan de forma indirecta para alcanzar el poder y conservarlo, garantizando que sus intereses se vinculen a determinadas ideologías que les garantizan cargos políticos.

La inestabilidad democrática, derivada de las crisis políticas, sociales y económicas, abre el flanco del militarismo y allana el camino para que las Fuerzas Armadas lleguen al poder en regímenes democráticos. En América Latina y el Caribe, la militarización de la seguridad pública debilita el control democrático de las instituciones militares y amplía la violación de derechos humanos.

## Conclusiones

En los países de América Latina hay confusión entre la política de defensa nacional y de seguridad pública, entre Fuerzas Armadas y Policía, lo que refuerza la titulización y crea obstáculos para dirimir problemas que carecen de políticas públicas que alcancen la raíz de las carencias de servicios públicos, cuya naturaleza es estructural y no conjetural. El combate a los problemas en la región es frecuentemente visto bajo la lente de las amenazas y su administración es implementada por medio de securitizaciones, que resultan en abordajes militaristas y policiales.

La consolidación y estabilidad democráticas varían de acuerdo con el control que la autoridad civil ejerza sobre los militares. En diversos países, considerados democráticos, tanto en América Latina como en Europa, se observa que la discusión sobre el control civil democrático sobre las Fuerzas Armadas es relegada a segundo plano. La investigación en general se reduce a determinados períodos históricos, sobre todo marcados por la transición de regímenes militares a Gobiernos democráticos, o es coyuntural, y se orienta en consonancia con eventuales desequilibrios cívico-militares, capaces de poner en peligro la consolidación democrática.

El progresivo desvío de la fuerza militar de la función principal de defensa de la patria contra amenazas externas es con frecuencia banalizado, principalmente en países cuyas relaciones con los vecinos son percibidas como pacíficas. La ampliación de las funciones de defensa es objeto de preocupación en todas las democracias. Es notable cómo la última ratio de la soberanía estatal, la fuerza militar, se emplea de modo cada vez más recurrente en funciones consideradas tradicionalmente civiles. La ampliación de las competencias de las Fuerzas Armadas en diversas democracias exige una clara determinación de los límites impuestos por el control civil y democrático sobre la actuación militar, a fin de evitar la autonomización de las fuerzas castrenses.

## Referencias

- Castelo Branco, Pedro H. Villas Bôas y Gouvêa, C. B. (2022). A militarização da política e a politização das forças armadas no governo Bolsonaro. In P. H. V. B. Castelo Branco, C. B. Gouvêa, I. M. B. Costa (Orgs.). *Estado de exceção, populismos e a militarização da política na pandemia da COVID-19* (pp. 55-78). Letramento, Casa do Direito.
- Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR]. (2015). *Violencia y uso de la fuerza*. ICERC. <https://shop.icrc.org/download/ebook?sku=0943/003-ebook>
- Dasso, A. (2020, 11 de enero). *Bolivia. Os militares antes do golpe. Radiografia das Forças Armadas do País*. Instituto Humanitas Unisinos. <https://www.ihu.unisinos.br/categorias/595515-os-militares-antes-do-golpe-radiografia-das-forcas-armadas-na-bolivia>
- Diamint, R. (2015). A New Militarism in Latin America. *Journal of Democracy*, 26(4), 155-168.
- Gouvêa, C. B. y Castelo Branco, P. H. V. B. (2020). *Populismos*. Casa do Direito.
- Huntington, S. P. (1984). Will More Countries Become Democratic? *Political Science Quarterly*, 99(2), 193-218. <https://www.jstor.org/stable/2150402?seq=1>
- Kraska, P. B. (2007). Militarization and Policing-Its Relevance to 21st Century Police. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 1(4), 501-513.
- Passos, A. M. y Acácio, I. (2021). The Militarization of Responses to COVID-19 in Democratic Latin America. *Revista de Administração Pública*, 55(1), 261-272.
- Pinheiro, D. C., Pereira, R. D. y Sabino, G. de F. T. (2019). Militarização das escolas e a narrativa da qualidade da educação. *Revista Brasileira de Política e Administração da Educação*, 35(3), 667-688.
- Redação Oeste. (2022, 17 de agosto). *Presidente da Colômbia muda cúpula militar e cria atritos com Forças Armadas*. Revista Oeste. <https://revistaoeste.com/mundo/presidente-da-colombia-muda-cupula-militar-e-cria-atrito-com-forcas-armadas/>
- Rede Brasil Atual. (2022, 12 de septiembre). Após mais de 40 decretos de Bolsonaro, brasileiros compram 1.300 armas por dia. *Brasil de Fato*. <https://www.brasildefato.com.br/2022/09/12/apos-mais-de-40-decretos-de-bolsonaro-brasileiros-compram-1-300-armas-por-dia>

- Ricardo, L. (2020, 10 de febrero). *Militarização das escolas e a narrativa da qualidade da educação*. Sindicato dos Professores no Distrito Federal. <https://www.sinprodf.org.br/militarizacao-das-escolas-e-a-narrativa-da-qualidade-da-educacao>
- Saint-Pierre, H. L., & Vitelli, M. G. (Eds.). (2018). *Dicionário de segurança e defesa*. Imprensa Oficial, Governo do Estado de São Paulo.
- Supremo Tribunal Federal [STF]. (2020). ADPF 635 MC. /RJ. Medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental 635 Rio de Janeiro. Relator(a): Edson Fachin. <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=761100480>
- Tickner, A. B. (2015). Securitization and the Limits of Democratic Security. In *Routledge Handbook of Latin American Security* (pp. 67-77). Routledge. <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=761100480>
- Vagts, A. (1959). *A History of Militarism*. Hollis & Carter.
- Vasconcelos da Silva, J. A. (2022, 30 de septiembre). Os militares e a última palavra da legitimidade das urnas. *Le Monde Diplomatique Brasil*. <https://diplomatique.org.br/os-militares-e-a-ultima-palavra-da-legitimidade-das-urnas/>
- Verdes-Montenegro Escáñez, F. J. (2019). *La (re) militarización de la política latinoamericana. Origen y consecuencias para las democracias de la región. Documentos de trabajo n.o 14*. Fundación Carolina. <https://www.fundacioncarolina.es/catalogo/la-remilitarizacion-de-la-politica-latinoamericana-origen-y-consecuencias-para-las-democracias-de-la-region/>